

# SESIONES ORDINARIAS

## 2002

# ORDEN DEL DIA N° 1761

### COMISION DE LEGISLACION PENAL

Impreso el día 29 de noviembre de 2002

Término del artículo 113: 10 de diciembre de 2002

SUMARIO: Código Penal. Modificación.

- 1.-Larraburu. (3.684-D.-2001.)
- 2.-Casanovas. (5.435-D.-2002.)

#### Dictamen de comisión

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Legislación Penal ha considerado los proyectos de ley de los señores diputados Larraburu y Casanovas, por los que se introducen modificaciones a diversas normas del Libro Primero del Código Penal; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 13 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 13: El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que hubiere cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento, bajo las siguientes condiciones:

1. Residir en el lugar que determine el auto de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir be-

bidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes.

3. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes.

Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 26, regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta diez años más, a contar desde el día de la libertad condicional.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 14 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 14: En caso de reincidencia, también podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento y bajo idénticas condiciones a las establecidas en el artículo anterior, el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido cuarenta años de condena, el condenado a reclusión o prisión por más de tres años que hubiere cumplido las cinco sextas partes de su condena y el condenado a reclusión o prisión por tres años o menos que hubiere cumplido un año y seis meses de reclusión o un año de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios.

Art. 3° – Sustitúyese el artículo 41 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 41 bis: Cuando alguno de los delitos previstos en este código sea cometido con

violencia o intimidación contra las personas, ejercidas mediante el empleo de un arma de fuego y esta circunstancia no se encontrara contemplada como elemento constitutivo o agravante del delito de que se trate, la pena prevista para el mismo se elevará en un tercio del mínimo y del máximo.

Art. 4° – Sustitúyese el artículo 50 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 50: Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme, a una pena privativa de la libertad, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación, o la condena anterior no se hubiere cumplido en forma efectiva.

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición.

A los efectos de la reincidencia, no se tomarán en cuenta los delitos militares o políticos, ni los amnistiados.

La condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al reo como reincidente, cuando hubiere transcurrido otro término igual al de la condena extinguida, que nunca excederá de diez años ni será inferior a cinco años.

Art. 5° – Sustitúyese el artículo 53 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 53: En los casos del artículo anterior, transcurridos diez años del cumplimiento de la reclusión accesoria, el tribunal que hubiera dictado la última condena o impuesto la pena única estará facultado para otorgarle la libertad condicional, previo informe de la autoridad penitenciaria, en las condiciones compromisorias previstas en el artículo 13, y siempre que el condenado hubiera mantenido buena conducta, demostrando aptitud y hábito para el trabajo, y demás actitudes que permitan suponer verosímilmente que no constituirá un peligro para la sociedad.

Transcurridos cinco años de obtenida la libertad condicional el condenado podrá solicitar su libertad definitiva al tribunal que la concedió, el que decidirá según sea el resultado obtenido en el período de prueba y previo informe del patronato, institución o persona digna de confianza, a cuyo cargo haya estado el control de la actividad del liberado.

Los condenados con la reclusión accesoria por tiempo indeterminado deberán cumplirla en establecimientos federales.

La violación por parte del liberado de cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 13 podrá determinar la revocatoria del

beneficio acordado y su reintegro al régimen carcelario anterior.

Después de transcurridos cinco años de su reintegro al régimen carcelario, en los casos de los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 13, el condenado podrá solicitar nuevamente su libertad condicional.

Art. 6° – Sustitúyese el artículo 55 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 55: Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, la suma aritmética de las penas mínimas correspondientes a los diversos hechos que integren el concurso, que no podrá exceder del doble del mínimo mayor, y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a esos mismos hechos, que no podrá exceder del doble del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Art. 7° – Sustitúyese el artículo 65 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 65: Las penas se prescriben en los términos siguientes:

1. La de reclusión o prisión perpetua, a los treinta años.
2. La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, exceder de treinta años.
3. La de multa, a los tres años.

Art. 8° – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 17 de la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, por el siguiente:

1. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
  - a) Pena temporal, sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: no reincidentes, la mitad de la condena; reincidentes, dos tercios de la condena;
  - b) Penas perpetuas, sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: no reincidentes, veinticinco años; reincidentes, treinta y cinco años;
  - c) Accesorias del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: cinco años.

Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2002.

*Franco A. Caviglia. – José A. Mirabile. – Guillermo E. Johnson. – Angel E. Baltuzzi. – Daniel A. Basile. – Jorge O. Casanovas. – María L. Chaya. – Juan C. López. – Carlos A. Martínez. – Adrián Menem. – Héctor R. Romero. – Juan M. Urtubey.*

En disidencia parcial:

*María del Carmen Falbo. – Víctor M. F. Fayad.*

En disidencia total:

*Hernán N. L. Damiani. – Margarita R. Stolzner.*

## INFORME

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Legislación Penal al considerar los proyectos de ley de los señores diputados Larraurru y Casanovas, por los que se introducen modificaciones a diversas normas del Libro Primero del Código Penal, cree innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que lo acompañan, por lo que los hace suyos y así lo expresa.

*María L. Chaya.*

## FUNDAMENTOS

### 1

Señor presidente:

No puedo empezar esta exposición sin dejar de señalar que comparto plenamente lo que expresa el señor diputado Teodoro Funes, al fundamentar su proyecto de reformas a diversas disposiciones de la parte general del Código Penal, en el sentido de que “desde hace algún tiempo la sociedad argentina viene reclamando por un derecho penal más estricto y riguroso” y que “la sensación de inseguridad de la población en general, merece una respuesta urgente de parte de sus representantes”.

También coincido con sus apreciaciones acerca de la inoportunidad de encarar una “gran reforma integral de nuestro sistema de enjuiciamiento penal” o la imprudencia de “intentar la penalización de la mayor cantidad posible de conductas” o “elevantar simplemente las escalas penales de algunos o de todos los delitos del código de fondo”.

Y coincido finalmente con el diputado Funes, en cuanto a que la forma más “sencilla y práctica” de hacerlo, así como también la más “rápida, perdurable y eficiente”, pasa por la modificación de las disposiciones de la parte general que se refieren a los plazos que se requieren para obtener la libertad condicional, aquellas que establecen la forma en que debe calcularse la penalidad aplicable en los casos de concurso de delitos o las relativas a los plazos de prescripción de las penas.

Sin embargo y aunque, insisto, considero que la dirección propuesta por mi distinguido compañero de bancada no sólo es la más “sencilla, práctica, rápida, perdurable y eficiente” de armar a la sociedad en defensa de la creciente criminalidad, creo que hay ciertos criterios, que hicieron de nuestro Código Pe-

nal uno de los más modernos de la época en que fue sancionado, que merecen ser mantenidos, aunque deba actualizárselos a los tiempos que corren.

Es que, indudablemente, los veinte años de cumplimiento de la pena de reclusión o prisión perpetua, que el legislador consideró suficientes para conceder la libertad condicional a quienes eran condenados a sufrir esa especie y cantidad de pena, podían merecer esa consideración en 1921, cuando los hipotéticos beneficiarios de esa norma llegaban al cenit de sus carreras delictivas bien pasados los veinte años de edad y cuando un hombre de más de cincuenta años era considerado “viejo”, en el mejor sentido de la palabra.

Pero resulta insostenible seguir pretendiendo que veinte años de cumplimiento de una condena a perpetuidad constituyan una respuesta penal suficiente para asegurar la defensa social, en los comienzos del siglo XXI, que aparecen caracterizados por la precocidad de los criminales más feroces y por un extraordinario aumento de la expectativa de vida, que se acerca cada vez más a los ochenta años.

Igualmente insostenible resulta, a esta altura de los tiempos, por idénticos motivos, el mantenimiento del plazo de cinco años fijado a los condenados a reclusión por tiempo indeterminado, para acceder al beneficio al que me vengo refiriendo.

Por su parte, la referencia al “máximo de la especie de pena de que se trate”, como penalidad máxima aplicable al delincuente múltiple, resulta especialmente injusta cuando los delitos cuya repetición se analiza son de extrema gravedad, como ocurre en los casos de homicidio o violación reiterada.

Y algo parecido puede decirse con la fijación del mínimo de la pena en función del mínimo mayor, sin tener en cuenta las penalidades mínimas que el legislador les ha fijado a los restantes delitos cometidos.

Pero no creo que deba prescindirse de toda limitación a la acumulación aritmética de las penas mínimas y máximas, entre otras cosas, porque la suma ilimitada de las penalidades máximas previstas, podría hacer ilusoria la eventual aplicación del instituto de la libertad condicional, en algunos casos, lo que considero inconveniente, atendiendo a su condición de irremplazable instrumento de la política carcelaria.

Tanto es así, que, según se verá, propongo que su aplicación se haga extensiva a los reincidentes, aunque estableciendo, claro está, que para acceder a ella estos últimos deban cumplir una mayor cantidad de tiempo de condena que los condenados que no revisten esa calidad.

Sobre la base de parecidos criterios, propongo igualmente el aumento de la penalidad aplicable en los casos de tentativa, cuando las penas previstas para el delito tentado fueran la de reclusión o la de prisión perpetua.

Y también considero que deben ser modificados, para tales supuestos, los plazos previstos para la

prescripción de las penas y los que establece la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para el acceso de los condenados al régimen de semi-libertad.

En lo que al plazo de la prescripción de las acciones se refiere propongo la adopción del sistema de la acumulación, defendido por Soler (Conf. *DPA*, tomo II, páginas 456/457, Editorial TEA, Buenos Aires, 1967) y por Vera Barros (Conf. *La prescripción en el Código Penal*, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1960), que me parece infinitamente más justo que el sistema del paralelismo, defendido por otros autores, poniendo fin de esa manera a décadas de controversias interpretativas, tanto doctrinarias como jurisprudenciales.

Otra reforma que resulta impostergable introducir a las disposiciones del libro primero del Código Penal, para seguir desandando el equivocado camino por el que ha transitado la política criminal en estos últimos años, es el concerniente al régimen de la reincidencia, en relación con el cual se impone retornar al sistema de la reincidencia ficta que consagraba el texto del artículo 50, en su versión anterior a la reforma que le introdujo la ley 23.057, que también trajo una larga secuela de controversias jurisprudenciales y doctrinarias acerca de en qué casos debe considerarse cumplida total o parcialmente una condena y acerca de si merece o no merece esa consideración la cumplida en prisión preventiva, en los casos en que la condena impuesta se ha dado por compurgada con el tiempo en que el reo ha permanecido en esa situación.

Y lo mismo merece decirse respecto de la caducidad del registro de las sentencias condenatorias y de las limitaciones de informar a su respecto que se impone al registro, en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 51 y sus respectivos incisos.

En el convencimiento de que el análisis de las reformas propuestas enriquecerá el debate que merece darse en torno de todos los temas incluidos en el proyecto que se adjunta, solicito su tratamiento y sanción.

*Dámaso Larraburu.*

2

Señor presidente:

Consciente de que estábamos atravesando por una etapa donde la delincuencia, y especialmente la delincuencia armada, había alcanzado niveles de violencia sin precedentes en la historia criminal de nuestro país y de que nuestras leyes penales habían sido superadas por el tiempo y por los acontecimientos, el 5 de abril del corriente año presenté un proyecto de ley proponiendo las reformas al Código Penal que la sociedad necesita hoy, para defenderse de esta ola de ataques a las personas y a la propiedad, a través del expediente 1.174-D.-02, que fue publicado en el Trámite Parlamentario N° 23 del corriente año.

Al explicar las motivaciones de dicha iniciativa, puse de manifiesto que la forma más “sencilla, práctica, rápida, perdurable y eficiente” de dar respuesta a la delincuencia que tiene en jaque a la sociedad, no debía buscarse en un espasmódico e indiscriminado aumento de las penas conminadas para los diferentes delitos que integran la parte especial del Código Penal, sino en la modificación de algunas disposiciones de su Parte General, que habían quedado absolutamente desactualizadas, desde que fueron sancionadas, hace más de ochenta años, o cuyo espíritu había sido alterado en nuestro pasado reciente.

Es que, como se explicaba en uno de los proyectos a los que me he referido, los veinte años de cumplimiento de la pena de reclusión o prisión perpetua que el legislador consideró suficientes para conceder la libertad condicional a quienes habían sido condenados a esa especie de pena, podían merecer esa consideración en 1921, cuando la expectativa de vida de una persona normal rondaba los setenta años y la edad promedio de los delincuentes condenados era muy superior a la media actual.

También expresé que debía atacarse la violencia que suele desatarse en todos los lugares a los que el público concurre en forma masiva, no solamente durante el desarrollo de espectáculos deportivos, sino en los de todo orden, donde pequeños grupos de inadaptados aprovechan el anonimato que les brinda la multitud para dar rienda suelta a sus malas inclinaciones, desde las más sutiles hasta las más brutales.

Por tal motivo, propuse la incorporación de una agravante de carácter genérico de la penalidad de cualquier delito que se cometiera en el marco de esa clase de acontecimientos.

Y, por parecidas razones, también resulta insostenible hoy que la penalidad máxima aplicable a los delincuentes múltiples siga siendo el máximo de la especie de pena de que se trate, como lo establece el artículo 55 del Código Penal, poniendo un tope de veinticinco años a la suma de los máximos de las penas de reclusión o prisión que pudieran corresponderles a los delitos concurrentes, que se revela como algo especialmente injusto cuando se juzga la reiteración de delitos de extrema gravedad.

Dije, igualmente, que la creciente ferocidad con la que actúan algunos delincuentes, que no trepidan en segar la vida de sus semejantes y que han llevado la cantidad de los homicidios que se cometen a diario en los cuatro puntos cardinales del país hasta índices desconocidos hasta el presente, me inclinaban a pensar que resultaba imperioso elevar las penas con las que se encuentran conminados los delitos que de una forma u otra consistían en la destrucción dolosa de la vida humana o traían aparejado ese resultado, y perfeccionar la forma en que se encuentra regulada la tenencia, la portación y el tráfico de armas de fuego.

Con esta última finalidad propuse que se elevara a la categoría de delito la simple tenencia de armas

de fuego de uso civil, que hoy constituye una simple “contravención federal”, sancionada por el artículo 42 bis de la ley 20.429 con una ridícula “multa” de mil a diez mil pesos o “arresto” hasta noventa días, proponiendo para quienes cometieran ese nuevo “delito” que se incorporaba al artículo 189 bis del Código Penal la aplicación de una pena de un mes a un año de prisión.

También postulaba allí que la portación no autorizada de armas de guerra fuera más severamente sancionada que la “simple tenencia” ilegítima de esa clase de armas, puesto que ello no se encontraba previsto por la ley vigente.

Propuse, asimismo, que se incrementaran drásticamente las penas previstas en el artículo 189 ter del Código Penal para quienes proporcionaran armas de fuego a quienes no se encuentren autorizados a poseerlas, por considerarlas incomprensiblemente benignas.

Y propuse, fundamentalmente, que esa conducta fuera aún más severamente penada cuando el destinatario de las armas fuera un menor de edad.

Pero lo cierto es que, como en el proyecto al que me vengo refiriendo, también incorporaba como agravante del homicidio la circunstancia de que la víctima fuera un integrante de las fuerzas de seguridad, que vistiera su uniforme reglamentario, que se hubiera dado a conocer como tal o que hubiera sido reconocido por cualquier otro medio como integrante de aquéllas, el mismo fue parcialmente considerado sobre tablas por esa Honorable Cámara, junto con todos los demás proyectos que incluían iniciativas similares, el 25 de abril próximo pasado, y posteriormente fue convertido en ley por el Senado de la Nación, motivos por los cuales perdió estado parlamentario.

Por tal motivo, ante la sensación de alarma colectiva que ya se había instalado a sus anchas en todos los estratos de la sociedad y haciendo notar que ya no corren mejor suerte los pobres que los ricos, ni los que viven dentro de la Capital Federal que los que lo hacen fuera de ella, ni los que viven en las ciudades respecto de los que lo hacen en el campo, sometí a la consideración de mis pares un nuevo proyecto que contenía todas las reformas al Código Penal, que contenía aquella iniciativa, pero que no habían sido materia de tratamiento en aquella sesión, a las que consideré útil añadir otras dos modificaciones, tendientes a endurecer la respuesta penal que merece quien utiliza un arma de fuego para delinquir, especialmente si dispara con ella contra sus víctimas, y a poner coto a la forma en que alguna jurisprudencia ha restringido los casos en que debe entenderse que ha mediado “uso de armas” en la comisión del delito de robo previsto en el artículo 166, inciso 2º, del Código Penal.

Para alcanzar dichos objetivos propuse que se modificara, en primer lugar, el artículo 41 bis, cuyo primer párrafo agrava genéricamente el empleo de armas de fuego en la comisión de cualquier delito

que no tenga previsto el uso de armas como elemento constitutivo o agravante de la figura respectiva, eliminando la limitación de que la penalidad máxima resultante no pueda exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Pero, también propuse la incorporación a ese dispositivo de un segundo párrafo, en el que se establecía un aumento mayor de la escala penal correspondiente al delito cometido con armas, para aquellos casos en los cuales el autor hubiera disparado el arma utilizada contra la víctima, que se hacía aplicable aunque el uso de armas se encontrara contemplado como elemento constitutivo o agravante del delito en cuestión, eliminando, asimismo, la tradicional limitación de que la penalidad máxima resultante no pudiera exceder el máximo legalmente previsto para la especie de pena de que se tratara.

Y, de acuerdo con lo anticipado más arriba, señalé que era igualmente imprescindible para alcanzar los objetivos propuestos introducir en el artículo 77 del Código Penal una definición auténtica de lo que debe entenderse por “arma”, concepto que no parece conveniente seguir dejando librado al criterio de intérpretes más o menos “progresistas”, para lo cual tomé en cuenta a Soler y a lo que para Soler constituye un arma (conf. *D.P.A.*, tomo IV, página 300, TEA, Buenos Aires, 1996).

Volví entonces a hacer pública mi convicción acerca de la insuficiencia de las reformas que proponía para terminar con la delincuencia, puesto que la misma no se suprime por ley, pero también volví a asegurar que, sin ellas, seguirá siendo muy difícil combatirla y que hasta es posible que perdamos la batalla.

Y, con la ineludible expectativa de que la política criminal fuera definitivamente asumida como una política de Estado y con la inagotable esperanza de que alguna vez dejáramos de correr detrás de los acontecimientos, el 18 de julio próximo pasado sometí a la consideración de mis pares ese nuevo proyecto, a través del expediente 4.263-D.-2002.

Pero, una de las reformas que contenían ambos proyectos se vinculaba con la agravación de la penalidad prevista para el delito de secuestro extorsivo, cuando de éste resultara la muerte de la víctima, y el asunto fue tratado sobre tablas por el plenario de la Cámara, en la sesión del día 14 del corriente, juntamente con el proyecto contenido en el expediente 2.787-D.-02, que propiciaba la reducción de penas para los “arrepentidos” que colaboraran con el esclarecimiento de esa clase de delitos.

Como ambas reformas obtuvieron media sanción por parte de esta Honorable Cámara y pasaron en revisión al Honorable Senado, juntamente con los expedientes que las contenían, vuelvo a reproducir aquel proyecto originario, excluyendo del mismo las reformas propuestas a los artículos 80 y 170 del Código Penal, que ya han sido sancionadas.

También se excluyen de este nuevo proyecto, en razón de haber sido propuestas por expediente

5.190-D.-02, las reformas que en los dos proyectos anteriores proponía a los artículos 189 bis y 189 ter de dicho cuerpo legal, lo mismo que la derogación del artículo 42 bis de la ley 20.429, lo que obedeció a la circunstancia de que la Comisión de Legislación Penal ya había comenzado a considerarlas en su reunión del día 13 de agosto próximo pasado, juntamente con otras iniciativas que apuntaban en la misma dirección, y se aprestaba a emitir despacho sobre el asunto, lo que finalmente ocurrió en la reunión del pasado 27 de agosto.

Por todo lo expresado, y con las anunciadas diferencias, vuelvo a reproducir ahora el proyecto de reformas al Código Penal que presenté el 5 de abril próximo pasado y que volví a presentar el 18 de julio del corriente año, con la inquebrantable expectativa de que las modificaciones que en el mismo se propician sean globalmente debatidas, para no seguir poniendo en riesgo el equilibrio que resulta imperioso preservar entre todas las normas que componen ese cuerpo legal, y que lo sean con la premura que reclama la hora.

*Jorge O. Casanovas.*

## ANTECEDENTES

### 1

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 13 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 13: El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido cuarenta años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que hubiere cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento, bajo las siguientes condiciones:

1. Residir en el lugar que determine el auto de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas.
3. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria, o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta cinco años más, a contar desde el día de la libertad condicional.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 14 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 14: En caso de reincidencia, también podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento y bajo idénticas condiciones a las establecidas en el artículo anterior, el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido cincuenta años de condena, el condenado a reclusión o prisión por más de tres años que hubiere cumplido las cinco sextas partes de su condena y el condenado a reclusión o prisión por tres años o menos que hubiere cumplido un año y seis meses de reclusión o un año de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios.

Art. 3° – Sustitúyese el artículo 44 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 44: La pena que correspondería al agente, si hubiera consumado el delito, se disminuirá de un tercio del máximo a la mitad del mínimo.

Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de treinta a cuarenta años.

Si la pena fuere de prisión perpetua, la pena de la tentativa será prisión de veinte a treinta años.

Si el delito fuere imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal de la especie de pena de que se trate o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelado por el delincuente.

Art. 4° – Sustitúyese el artículo 50 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 50: Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme, a una pena privativa de la libertad, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación.

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición.

A los efectos de la reincidencia, no se tomarán en cuenta los delitos militares o políticos, ni los amnistiados.

La condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al reo como reincidente, cuando hubiere transcurrido otro término igual al de la condena extinguida, que nunca excederá de diez años ni será inferior a cinco años.

Art. 5° – Sustitúyese el artículo 51 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 51: Todo ente oficial que lleve registros de antecedentes penales se abstendrá de informar sobre los procesos terminados por sentencia absolutoria o por sobreseimiento.

En ningún caso se informará sobre detenciones que no se relacionen con la formación de una causa, salvo que los informes se requieran en causas por delitos de los cuales haya sido víctima la persona acerca de la cual se requieren los informes o para resolver un hábeas corpus interpuesto a favor de la misma.

Art. 6° – Sustitúyese el artículo 53 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 53: En los casos del artículo anterior, transcurridos diez años del cumplimiento de la reclusión accesoria, el tribunal que hubiera dictado la última condena o impuesto la pena única estará facultado para otorgarle la libertad condicional, previo informe de la autoridad penitenciaria, en las condiciones compromisorias previstas en el artículo 13, y siempre que el condenado hubiera mantenido buena conducta, demostrando aptitud y hábito para el trabajo, y demás actitudes que permitan suponer verosímelmente que no constituirá un peligro para la sociedad.

Transcurridos cinco años de obtenida la libertad condicional el condenado podrá solicitar su libertad definitiva al tribunal que la concedió, el que decidirá según sea el resultado obtenido en el período de prueba y previo informe del patronato, institución o persona digna de confianza, a cuyo cargo haya estado el control de la actividad del liberado. Los condenados con la reclusión accesoria por tiempo indeterminado deberán cumplirla en establecimientos federales.

La violación por parte del liberado de cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 13 podrá determinar la revocatoria del beneficio acordado y su reintegro al régimen carcelario anterior. Después de transcurridos cinco años de su reintegro al régimen carcelario, en los casos de los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 13, podrá solicitar nuevamente su libertad condicional.

Art. 7° – Sustitúyese el artículo 55 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 55: Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso tendrá como mínimo, la suma aritmética de las cantidades mínimas de pena correspondientes a los diversos hechos concurrentes, que no podrá exceder del doble del mínimo mayor, y como máximo, la suma aritmética de

las cantidades máximas de pena correspondientes a esos mismos hechos. Sin embargo, cuando los hechos que integren el concurso se encuentren reprimidos con penas privativas de la libertad, esta última suma no podrá exceder de sesenta años de reclusión o prisión.

Art. 8° – Sustitúyese el artículo 56 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 56: Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de reclusión y prisión, la pena aplicable al reo en tal caso tendrá como mínimo, la suma aritmética de las cantidades mínimas de pena correspondientes a los diversos hechos concurrentes, que no podrá exceder del doble del mínimo que resulte cuantitativamente mayor, y tendrá como máximo, la suma aritmética de las cantidades máximas de pena correspondientes a esos mismos hechos, que no podrá exceder de sesenta años de duración, quedando librado al arbitrio del juez, en todos los casos, la determinación de la especie de pena que se aplicará al reo.

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta, únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión perpetua.

La inhabilitación y la multa se aplicarán siempre, sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo primero.

Art. 9° – Derógase el artículo 57 del Código Penal.

Art. 10. – Incorpórase como último párrafo del artículo 58 del Código Penal, el siguiente:

La determinación de la pena a imponer en la sentencia única, cuyo dictado se contempla en el presente artículo, se hará sumando arítmicamente las penas impuestas por cada una de las sentencias a unificar, teniendo en cuenta que, cuando se trate de penas divisibles privativas de la libertad, la suma total de las mismas no podrá exceder de sesenta años de reclusión o prisión.

Art. 11. – Sustitúyese el artículo 62 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 62: La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

1. A los treinta años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuera la de reclusión o prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el tiempo de duración de la pena máxima aplicable al delito o al concurso de delitos, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso exceder el término de la prescripción de quince años o bajar de tres años.

3. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal.
5. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 65 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 65: Las penas se prescriben en los términos siguientes:

1. La de reclusión o prisión perpetua, a los cuarenta años.
2. La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, exceder de cuarenta años.
3. La de multa, a los dos años.

Art. 13. – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 17 de la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, por el siguiente:

1. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
  - a) Pena temporal, sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena;
  - b) Penas perpetuas, sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: treinta y cinco años;
  - c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: ocho años.

Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Dámaso Larraburu.*

## 2

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 13 del Código Penal de la Nación por el siguiente:

Artículo 13: El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido cuarenta años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y el condenado a reclusión o prisión por tres años o menos que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes condiciones:

1. Residir en el lugar que determine el auto de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacentes.
3. Adoptar en el plazo que el auto determine oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes.

Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 26, regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta veinte años más en las perpetuas, a contar desde el día de la libertad condicional.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 41 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 41 bis: Cuando alguno de los delitos previstos en este código sea cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego y esta circunstancia no se encuentre contemplada como elemento constitutivo o agravante del delito de que se trate, la pena prevista para el mismo se elevará en un tercio del mínimo y del máximo aunque este último exceda el máximo de la especie de pena de que se trate.

Si el culpable efectuare uno o más disparos con el arma de fuego empleada contra la persona violentada o intimidada, la pena prevista para el delito se elevará al doble del mínimo y en la mitad del máximo, aunque el uso del arma se encuentre contemplado como elemento constitutivo o agravante del delito de que se trate y aunque la pena máxima resultante exceda del máximo de la especie de pena de que se trate.

Art. 3° – Incorpórase al Código Penal de la Nación, el siguiente artículo:

Artículo 41 ter: Cuando alguno de los delitos de los previstos en este código se cometiera con motivo o en ocasión de un espectáculo público de cualquier naturaleza, sea en el ámbito en el cual se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de su desarrollo, la pena prevista para el mismo se elevará en un tercio del mínimo y del máximo, aunque este último exceda el máximo de la especie de pena de que se trate.

Art. 4° – Sustitúyese el artículo 50 del Código Penal de la Nación por el siguiente:



Artículo 50: Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme a una pena privativa de libertad, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación, o la condena anterior no se hubiere cumplido en forma efectiva.

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición.

A los efectos de la reincidencia, no se tomarán en cuenta los delitos militares o políticos, ni los amnistiados.

La condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al reo como reincidente cuando hubiere transcurrido otro término igual al de la condena extinguida, que nunca excederá de diez años ni será inferior a cinco años.

Art. 5° – Sustitúyese el artículo 55 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 55: Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá, como mínimo, la suma aritmética de las penas mínimas correspondientes a los diversos hechos que integren el concurso, que no podrá exceder del doble del mínimo mayor, y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a esos mismos hechos, que no podrá exceder de sesenta años de duración cuando los hechos concurrentes se encuentren reprimidos con penas privativas de la libertad.

Art. 6° – Incorpórase como último párrafo del artículo 77 del Código Penal, el siguiente:

El término “arma” comprende todo instrumento específicamente destinado a herir o dañar a las personas, cualquiera sea su estado o condición, y cualquier otro objeto que sea transformado en un instrumento semejante por su empleo como medio contundente.

Art. 7° – Sustitúyese el artículo 79 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 79: Se aplicará reclusión o prisión de diez a treinta años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena.

Art. 8° – Sustitúyese el artículo 95 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 95: Cuando en riña o agresión en que tomen parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrán por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años en caso de muerte y de uno a cuatro años de prisión en caso de lesión.

Art. 9° – Sustitúyese el artículo 165 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 165: Se impondrá reclusión o prisión de quince a cuarenta años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Jorge O. Casanovas.*